

Plaza Pública para la edición del 1 de octubre de 1996
Sin permiso
por miguel ángel granados chapa

Un oyente distraído hubiera supuesto, al escuchar al Presidente Zedillo hablar el domingo por la televisión, que estaba haciendo autocrítica. “Hay personas, dijo, que tienen ciertos intereses políticos, que tienen cierta agenda política, que les convendría convencer a la gente que hay esa situación para que ellos surjan como los grandes redentores”. Parecía estar refiriéndose a una práctica usual en gobiernos autoritarios, denominada el “síntoma del bombero piromaniaco”. Tal deformada contradicción consiste precisamente en encender los fuegos para después hacer mérito al apagarlos, tarea sencilla si se conoce el origen y la naturaleza del incendio.

No ha sido extraño que actúen así en México autoridades reponsables de la política interior, de la seguridad nacional o de la defensa. Ahora mismo hay indicaciones de que la presencia del Ejército Popular Revolucionario creció ante el conocimiento, al menos, de impasibles círculos del poder, que dejaron hacer a fin de expandirse y ganar espacios de decisión. Por lo pronto, es un hecho que el Ejército federal ha intensificado y extendido su vigilancia. Hay más soldados donde ya los había en número significativo, como Chiapas y Guerrero, y hay más entidades donde ahora es notoria la presencia castrense y hace poco no lo era.

También por ese motivo parecía autocrítica la conversación presidencial, pues su rechazo a las afirmaciones sobre la generalización de la violencia debería servir de fundamento a la decisión de reducir tal presencia militar, pues si no es verdad que la violencia se extiende, no hay entonces causa que la justifique.

Pero no. Al tocar esos temas, el Presidente estaba viendo la paja en el ojo ajeno. Se refería a la iniciativa suscrita por la Comisión Nacional de Intermediación, y por centenares de agrupaciones y personas más, para propiciar e diálogo nacional que conduzca a la paz. El Ejecutivo se impacienta ante las descalificaciones y la etiquetación (que, por ejemplo, tilda de neoliberal a su política económica, a la que cabe llamar neoliberal porque es neoliberal) y sin embargo él practica sin cesar la descalificación y las etiquetaciones. Alude como “falsos redentores” no a sus secretarios de Gobernación o la Defensa Nacional, sino a los miembros de la Conai. Al hacerlo, incurre en la falacia de presentar a la mediación como infractora de sus deberes o, como lo dice con menor agudeza el negociador gubernamental Marco Antonio Bernal, de ser ambigua, pues o se media o se actúa políticamente.

Ese es un falso dilema. En un conflicto de la naturaleza y el rango como el de la insurgencia armada, la mediación no puede limitarse a ser un simple nuncio, un portador de recados de una parte a la otra. Hasta por el hecho, simple y a la vez complejo de las hondas diferencias culturales entre las partes enfrentadas, la mediación tiene que ser, también,

un actor político, en el sentido de traducir, hacer comprensibles los mensajes, y de diagnosticar y actuar sobre la realidad, en la medida en que esas tareas sean precisas para el logro de la paz, que es su propósito también, por lo menos en igual medida en que lo es de las partes. En esos términos ha actuado la Conai, y así ha sido aceptada su labor por el zapatismo y por el gobierno. Pero éste la admite a regañadientes, cuando debería manifestarle reconocimiento, como lo haría quien efectivamente desea la pacificación y aprovecha y agradece toda intervención en el sentido.

Pero el gobierno, cuya secretaría de la política interior recibió de la Conai hace apenas diez días una iniciativa relacionada con la zona norte de Chiapas, físicamente fuera de la comarca donde se concentra el conflicto en el que es mediadora, se resiste una vez más a admitir la dimensión nacional de esa disputa. Bastaría para sacarlo de su error la consideración elemental de que está por empezar a discutirse en el Congreso federal un conjunto de reformas y adiciones a la Constitución de la República y a la legislación nacional, sobre comunidades indígenas, derivadas precisamente del diálogo entre el zapatismo y el gobierno federal, no el local de Chiapas.

Un de las razones por las cuales se atoró la negociación en San Andrés es precisamente la existencia de condiciones de carácter nacional del que depende su curso. Una de ellas es la aparición del Ejército Popular Revolucionario, que actúa en varias regiones del país, y que requiere y tiene un

abordamiento federal. Por eso resulta impresindible la realización del dialogo nacional, como mecanismo que facilite la reanudación de las conversaciones entre el EZLN y el gobierno. Por eso, lejos de faltar a su misión, la Conai busca cumplir al demandar junto con muchas agrupaciones y personas, el reconocimiento de la verdadera talla del conflicto que estalló el primero de enero de 1994

Pero un gobierno largamente, profundamente autoritario se aviene mal a iniciativas que escapan a su control, y por eso las deforma. De ese modo el régimen busca que sus reglas rijan la actividad de los particulares. Cuando, en su respuesta a la Conai, hace una semana, le ordenó cómo realizar su análisis, el gobierno implica que no se puede hacer política sin su permiso. Tendrá, sin embargo, que reconocer que el momento de la libre actuación de los ciudadanos las agrupaciones ha llegado. Así se lo hará saber no sólo la realización del congreso nacional por la paz, sino otra iniciativa paralela, la del congreso indígena en la ciudad de México, del que hablaremos mañana.

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Sin permiso

El Ejecutivo se impacienta ante las descalificaciones y la etiquetación (que, por ejemplo, tilda de neoliberal a su política económica, a la que cabe llamar neoliberal porque es neoliberal) y sin embargo él practica sin cesar la descalificación y las etiquetaciones.

UN OYENTE DISTRAÍDO HUBIERA SUPUESTO, AL ESCUCHAR al presidente Zedillo hablar el domingo por la televisión, que estaba haciendo autocrítica. "Hay personas -dijo- que tienen ciertos intereses políticos, que tienen cierta agenda política, que les convendría convencer a la gente que hay esa situación para que ellos surjan como los grandes redentores". Parecía estar refiriéndose a una práctica usual en gobiernos autoritarios, denominada el "síntoma del bombero piromaniaco". Tal deformada contradicción consiste precisamente en encender los fuegos para después hacer mérito al apagarlos, tarea sencilla si se conoce el origen y la naturaleza del incendio.

No ha sido extraño que actúen así en México autoridades responsables de la política interior, de la seguridad nacional o de la defensa. Ahora mismo hay indicaciones de que la presencia del Ejército Popular Revolucionario creció ante el conocimiento, al menos, de impasibles círculos del poder, que dejaron hacer a fin de expandirse y ganar espacios de decisión. Por lo pronto, es un hecho que el Ejército federal ha intensificado y extendido su vigilancia. Hay más soldados donde ya los había en número significativo, como Chiapas y Guerrero, y hay más entidades donde ahora es notoria la presencia castrense y hace poco no lo era.

También por ese motivo parecía autocrítica la conversación presidencial, pues su rechazo a las afirmaciones sobre la generalización de la violencia debería servir de fundamento a la decisión de reducir tal presencia militar, pues si no es verdad que la violencia se extiende, no hay entonces causa que la justifique.

Pero no. Al tocar esos temas, el Presidente estaba viendo la paja en el ojo ajeno. Se refería a la iniciativa suscrita por la Comisión Nacional de Intermediación, y por centenares de agrupaciones y personas más, para propiciar el diálogo nacional que conduzca a la paz.



El Ejecutivo se impacienta ante las descalificaciones y la etiquetación (que, por ejemplo, tilda de neoliberal a su política económica, a la que cabe llamar neoliberal porque es neoliberal) y sin embargo él practica sin cesar la descalificación y las etiquetaciones. Alude como "falsos redentores" no a sus secretarios de Gobernación o la Defensa Nacional, sino a los miembros de la Conai. Al hacerlo, incurre en la falacia de presentar a la mediación como infractora de sus deberes o, como lo dice con menor agudeza el negociador gubernamental Marco Antonio Bernal, de ser ambigua, pues o se medía o se actúa políticamente.

Ese es un falso dilema. En un conflicto de la naturaleza y el rango como el de la insurgencia armada, la mediación no puede limitarse a ser un simple nuncio, un portador de recados de una parte a la otra. Hasta por el hecho, simple y a la vez complejo de las hondas diferencias culturales entre las partes enfrentadas, la mediación tiene que ser, también, un actor político, en el sentido de traducir, hacer comprensibles los mensa-

Cuando, en su respuesta a la Comisión Nacional de Intermediación, hace una semana, le ordenó cómo realizar su análisis, el gobierno implica que no se puede hacer política sin su permiso.

jes, y de diagnosticar y actuar sobre la realidad, en la medida en que esas tareas sean precisas para el logro de la paz, que es su propósito también, por lo menos en igual medida en que lo es de las partes. En esos términos ha actuado la Conai, y así ha sido aceptada su labor por el zapatismo y por el gobierno. Pero éste la admite a regañadientes, cuando debería manifestarle reconocimiento, como lo haría quien efectivamente desea la pacificación y aprovecha y agradece toda intervención en tal sentido.

Pero el gobierno, cuya secretaría de la política interior recibió de la Conai hace apenas diez días una iniciativa relacionada con la zona norte de Chiapas, físicamente fuera de la comarca donde se concentra el conflicto en el que es mediadora, se resiste una vez más a admitir la dimensión nacional de esa disputa. Bastaría para sacarlo de su error la consideración elemental de que está por empezar a discutirse en el Congreso federal un conjunto de reformas y adiciones a la Constitución de la República y a la legislación nacional, sobre comunidades indígenas, derivadas precisamente del diálogo entre el zapatismo y el gobierno federal, no el local de Chiapas.

Una de las razones por las cuales se atoró la negociación en San Andrés es precisamente la existencia de condiciones de carácter nacional del que depende su curso. Una de ellas es la aparición del Ejército Popular Revolucionario, que actúa en varias regiones del país, y que requiere y tiene un abordamiento federal. Por eso resulta imprescindible la realización del diálogo nacional, como mecanismo que facilite la reanudación de las conversaciones entre el EZLN y el gobierno. Por eso, lejos de faltar a su misión, la Conai buscar cumplir al demandar junto con muchas agrupaciones y personas, el reconocimiento de la verdadera talla del conflicto que estalló el primero de enero de 1994.

Pero un gobierno largamente, profundamente autoritario se aviene mal a incitativas que escapan a su control, y por eso las deforma. De ese modo el régimen busca que sus reglas rijan la actividad de los particulares. Cuando, en su respuesta a la Conai, hace una semana, le ordenó cómo realizar su análisis, el gobierno implica que no se puede hacer política sin su permiso. Tendrá, sin embargo, que reconocer que el momento de la libre actuación de los ciudadanos las agrupaciones ha llegado. Así se lo hará saber no sólo la realización del congreso nacional por la paz, sino otra iniciativa paralela, la del Congreso indígena en la ciudad de México, del que hablaremos mañana.